

á que se ha hecho referencia. Visto el pedimento del ciudadano promotor fiscal; la prueba rendida, acreditando el domicilio de la promovente; la sentencia del inferior, y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, y

Considerando: que la incompetencia que se objeta en las autoridades del Distrito de Tepeaca para decidir y llevar adelante el matrimonio de la hija de la Palacios, no es de la que habló el art. 16: que en consecuencia la presente queja, no debe ser materia de amparo. Se declara: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Puebla que otorgó dicho amparo.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el To- ca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron:—*José M. Iglesias—M. Auza.—Juan J de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar.*—secretario.

Es copia que certifico.—México, Diciembre 10 de 1874.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de esta capital, por el veco Andrés Pineda, contra la Comandancia Militar, que le instruye causa por el homicidio perpetrado en la persona de Martín Aguas, soldado del 7º cuerpo de Policía rural, con cuyo acto cree el quejoso que se vulnera en su persona la garantía que otorga el art. 13 de la Constitución federal.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por Andrés Pineda, quejándose de que acusado del delito de homicidio en la persona del C. Martín Aguas, que cometió en propia defensa, se le juzga por la Comandancia Militar con infraccion del art. 13 de la Constitución, sin ser militar, ni estar comprendido en la fraccion 4ª del art. 2º de la ley de 15 de Setiembre de 1857. Pedida la suspension del acto reclamado, y sustanciado el punto en la forma debida, el juzgado declaró que no habia lugar á la suspension. Continuando el juicio, la Comandancia Militar rindió informe en lo principal, insertando el dictámen del ciudadano asesor de la Comandancia, estendido con ocasion de dicho informe, y contiene un extracto de las principales diligencias practicadas en la causa de Pineda. Sin entrar al exámen detallado de esas diligencias, lo que importaria una revision, de lo actuado y lo que ni corresponde al juzgado, ni ha sido reclamado por el quejoso, pues no impugna la forma del procedimiento, sino la falta de jurisdiccion del Tribunal que lo juzga, el que suscribe segun es debido, pasa á considerar la única cuestion que debe ser materia del juicio de amparo, á saber: ¿Es competente la Comandancia Militar para juzgar al paisano Andrés Pineda del homicidio cometido en la persona del C. Martín Aguas, perpetrado en el acto de escoltar la Diligencia de

27.

Quautitlan? En vista del informe del ciudadano Comandante Militar y las constancias de autos, puede resolverse afirmativamente. El quejoso por parte de su prueba, presentó las declaraciones de dos testigos que afirman: "que encontrándose bebiendo pulque en una pulquería situada á inmediaciones de la casa de Pineda en la cuesta de Barrientos, presenciaron que este refía con tres hombres que despues aparecieron pertenecer á una escolta rural, pero que no tenían durante la riña uniforme militar, ni estaban desempeñando ostensiblemente ningun acto del servicio militar." Tanto por estas declaraciones, como del informe del Comandante Militar, aparece comprobado el hecho de que el occiso pertenecía á la fuerza rural que custodia el camino de Tlalnepantla, y que siendo un servicio militar, para este caso es aplicable la ley de 15 de Setiembre de 1857. La Constitucion en su art. 13, prohibe que ninguna persona ni corporacion pudieran tener fueros; pero declaró subsistente el fuero de guerra para los delitos y faltas que tengan esacta conexion con la disciplina militar. La citada ley de 15 de Setiembre de 1857, determina los casos en que existe esa esacta conexion con la disciplina militar; y la parte 1ª de la fraccion 4ª del art. 2º de la mencionada ley, dice: "Resistencia armada á insultos á militares ocupados actual y patentemente en actos del servicio militar."

Que el quejoso conocía la existencia de las fuerzas rurales, es indudable, pues teniendo su habitacion situada en el camino que custodiaban diariamente, podía hasta conocer individualmente á las personas de las escoltas.

Que el delito es de la competencia militar, lo reconoció el juzgado de letras de Tlalnepantla, cuando á petición del quejoso inició competencia reclamando el conocimiento de la causa, y en virtud del informe del ciudadano Comandante Militar se desistió, conformándose el quejoso, supuesto que no reclamó el desistimiento.

Por lo expuesto, el que suscribe pide al juzgado, que dejando á salvo los derechos del quejoso en cuanto al procedimiento, declare que la justicia federal no ampara ni protege á Andrés Pineda.

México, Octubre 29 de 1874.—*Herrera Campos.*

Es copia que certifico.—*J. de A. Osorno,* secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Noviembre 18 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido por Andrés Pineda, vecino del pueblo de Barrientos, contra los procedimientos de la Comandancia Militar, en la causa que le instruye por el homicidio perpetrado en la persona de Martin Aguas, soldado del sétimo cuerpo de policía rural, que se funda, en que en el conocimiento de la causa se viola en su persona la garantía otorgada en el art. 13 de la Constitucion, porque no estando comprendido el delito porque se le juzga, en la parte 5ª de ese artículo, la Comandancia Militar no tiene jurisdiccion para conocer. Visto el informe de esta autoridad; lo pedido por el ciudadano promotor, y lo demás que ver convino. Resultando del escrito de queja, y del informe con justificacion rendido por la Comandancia Militar:

1º Que Andrés Pineda ejecutó el homicidio en la persona de Martin Aguas, escopionándose con el hecho de haberlo cometido en legítima defensa, y en un acto de excitacion causado por los ultrajes que á su anciana madre le infirían individuos de la escolta.

2º Que el hecho que motivó la averiguacion, se verificó en un lugar por donde transitan diariamente las diligencias generales, y con individuos pertenecientes á la fuerza que las custodia, como encargada de la seguridad del camino de México á Tepeji, cuyo lugar es la cuesta de Barrientos.

3º Que en este lugar y á corta distancia tiene su habitacion el referido Pineda.

4º Que el Juzgado de primera instancia de Tlalnepantla, por auto de 25 de Julio del corriente año, se desistió de la competencia iniciada á la Comandancia general, porque el homicidio del soldado Martín Aguas, fué perpetrado por Pineda cuando aquel estaba ocupado patentemente en actos del servicio, pues venia escoltando la diligencia que conducía á esta capital al C. general Berriozábal (fojas 12 y 8 vuelta.)

Considerando: que el hecho de la agresión y el de la defensa; son conexos, que para conocer y juzgar del grado de culpabilidad de ambas acciones, no puede dividirse la jurisdicción entre dos tribunales, sino que á uno solo debe corresponder el conocimiento de la causa: que para juzgar de la responsabilidad por el delito oficial ó comun que pueda haber cometido la fuerza armada en el acto en que tuvo lugar el homicidio, no es competente el juez del fuero comun, porque conforme á la ley de 5 de Mayo de 1861, estas fuerzas como sujetas al ministerio de la Guerra, lo están al fuero militar en las funciones del servicio; que el hecho que ha pretendido probar Pineda de que la fuerza no llevaba uniforme, no es por sí bastante para probar que ignoraba fuera fuerza pública, pues además de que iba escoltando la diligencia que transitaba por el lugar en que vivía Pineda, por lo cual al reunir con uno, ó con todos los individuos de la fuerza, se sujetó á todas las consecuencias de ese hecho, entre ellas, á ser juzgado por la Comandancia Militar; en consecuencia de todo lo cual resulta, que el delito por que está procesado Andrés Pineda por la Comandancia Militar, tiene exacta connexion con la disciplina militar, y por tanto está sujeto al fuero de guerra. Con fundamento de lo expuesto, de la ley de 5 de Mayo de 1861, 15 de Setiembre de 1857 frac. 4º, art. 2º, art. 13 part. 5ª y 101 de la Carta fundamental de la República, se declara: 1º Que la Justicia federal no lo ampara ni protege contra los actos de la Comandancia Militar, por los cuales conoce y procede

en dicha causa. 2º Hágase saber, y publicada la sentencia en la forma acostumbrada, elevense las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo proveyó y firmó el ciudadano juez 1º interino de Distrito Lic. José María Landa: Doy fé.—*José María Landa.*—*F. de A. Osorno*, secretario.

Es copia. *Francisco de A. Osorno*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 5 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado 1º de Distrito de esta capital, por el reo Andrés Pineda, contra la comandancia militar, que le instruye causa por el homicidio perpetrado en la persona de Martín Aguas, soldado del 7º cuerpo de policía rural, con cuyo acto cree el quejoso que se vulnera en su persona la garantía que otorga el art. 13 de la Constitución federal, porque no estando comprendido el delito por que se le juzga en la parte 5ª de este artículo, la comandancia militar no tiene jurisdicción alguna para conocer en el presente caso. Visto el pedimento del ciudadano promotor fiscal, la sentencia del juez de Distrito que negó el amparo al quejoso y las demás constancias que obran en autos; y considerando: Que por ningún motivo puede estimarse que el delito de que se acusa á Pineda, tenga exacta connexion con la disciplina militar, y que por lo mismo el quejoso debe ser juzgado por los jueces del fuero comun, y no por tribunal alguno especial, pues tal caso importaría una violación de la garantía que otorga el art. 13 de la Constitución federal; con fundamento de lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: 1º Que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el juez 1º de Distrito de esta capital en 18 de Noviembre próximo pasado, que negó el amparo al quejoso. 2º La justicia

de la union ampara y protege al reo Andrés Pineda, contra el acto que motivó el presente recurso, quedando consignado el reo al juez del fuero comun.

Devuélvase las actuaciones al juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 6 de Diciembre de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Sinaloa por D. Othon Wegelin, contra el cobro que hace el administrador de la Aduana terrestre de Mazatlan, de la cantidad de 181 pesos 37 centavos, por derechos de consumo de efectos extranjeros.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice:—El presente juicio de amparo ha sido promovido por D. Othon Wegelin de este comercio, contra el administrador de la aduana terrestre de este puerto, que en ejercicio de la facultad coactiva y en cumplimiento de la ley de 23

de Mayo de 1873, le exige por 6 por ciento de derecho de consumo directo, la cantidad de 181 pesos 35 cs., precisamente en moneda de plata á oro, con exclusion de la de cobre acuñada en la casa de moneda de Chihuahua. Funda su solicitud el quejoso, tanto en la ejecucion de dicha ley sobre derecho de consumo que considera como privativa, y por tanto anticonstitucional, supuesto que infrinje el art. 13 de la Constitucion general, á la vez que con la exclusion de la moneda de cobre en que ofrece pagar, cree que se atacan las garantías que concede el art. 27 de la misma Constitucion y se invaden las facultades federales.

El fiscal no cree que la queja de Sr. Wegelin pueda fundarse en el art. 13 de la Constitucion federal, porque no es el caso de aplicar á este señor una ley privativa ni de ser juzgado por tribunal especial; pero en cuanto á la violacion que supone del art. 27 y á la invasion por parte de la legislatura del Estado, de las facultades federales, basta recorrer simplemente las diversas ejecutorias que en casos iguales ha expedido la Suprema Corte de Justicia nacional, para resolver en su favor, pues dichas ejecutorias han formado una jurisprudencia especial.

Por lo expuesto, el fiscal es de parecer, que ese juzgado declare que la justicia de la Union ampara y protege á D. Othon Wegelin, contra los actos del ciudadano administrador de la aduana terrestre que se niega á recibir en moneda de cobre el pago de los derechos á que se refiere esta solicitud. —Mazatlan, Setiembre 18 de 1874.—*L. Gaona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Setiembre 21 de 1874.

Vistos.—El Sr. D. Othon Wegelin, de este comercio, se presentó pidiendo amparo contra el cobro que le hace el administrador de la aduana terrestre de esta ciudad, de la